

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
DISTRITO JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA
CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE BUGA**

FECHA

AÑO INICIACION PROCESO

2016

NÚMERO DE RADICACIÓN:

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR:

CUDULA DE CIUDADANIA:

DIRECCION:

TELEFONO:

EDINSON GARCES RAMIREZ

94,442,651 DE BUENAVENTURA

CALLE 23 REUBICACION LA ISLA

317-4556579

DEMANDADO

EJÉRCITO

NIT

DIRECCIÓN:

EJÉRCITO BOGOTÁ

NACION MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO

800.130.635-4

AVENIDA CALLE 26 Nº 52 - 00. EDIFICIO COMANDO

ENVIO A USTED Y POR **1** VEZ, EL PROCESO DE LA REFERENCIA, QUE CONSTA DE **6** CUADERNOS, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 32

APELACION SENTENCIA

AUTO

CONSULTA

CONTRA LA PROVIDENCIA

FECHA

QUE OBRA DE

FOLIOS

APODERADO DEL ACTOR:

CUDULA DE CIUDADANIA:

DIRECCIÓN:

ALVARO RUEDA CELIS

79.110.245 de Bogotá

CALLE 73 BIS No. 26-28 BOGOTÁ

APODERADO DEL DEMANDADO:

CC Nº

DIRECCIÓN:

CORDIALMENTE,


FIRMA



Alvaro Rueda C.
Abogados
Especializados

CUIDANDO SUS INTERESES.

Señor Juez

CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE
E. S.

Buga
D.

(REPARTO)

EDINSON GARCES RAMIREZ, de Soldado Profesional, por este memorial me dirijo a su despacho, manifestando que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **ALVARO RUEDA CELIS**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.110.245 de Fontibón, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. 170.560 del Consejo Superior de la Judicatura para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación el proceso contencioso administrativo de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO EJERCITO, representado por el Señor General **ALBERTO JOSE MEJIA FERRERO**, o quien haga sus veces, a fin de que con el cumplimiento de los trámites previstos en el proceso ordinario contencioso administrativo se declare la nulidad del acto administrativo **No. 20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015**, expedido por la FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-COMANDO EJERCITO, por el cual se me negó la liquidación de mi salario mensual tomando como asignación básica el dispuesto en el párrafo segundo del artículo Primero del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, a que legalmente tengo derecho como Soldado profesional y como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese: al Comando del Ejército Nacional a liquidar mi salario mensual tomando como asignación básica de liquidación el salario mensual establecido en el artículo 1º inciso segundo del Decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000, esto es un Salario Mínimo más un 60% del mismo, a que tengo derecho, desde el mes de octubre de 2003 a la fecha de mi retiro del servicio activo, igualmente se ordene la reliquidación del auxilio de cesantías para el mismo periodo, y se paguen indexados los dineros adeudados por los conceptos resultantes de las liquidaciones solicitadas anteriores e intereses que se originen; así como el pago de gastos procesales y agencias en derecho que conlleve adelantar este proceso.

El Doctor **ALVARO RUEDA CELIS**, además de lo previsto en el artículo 77 del CGP, está facultado para demandar, allegar pruebas, interponer recursos recibir, transigir, sustituir, tutelar, renunciar, conciliar y reasumir las actuaciones que sean necesarias para asumir la defensa de mis intereses suscitados dentro del proceso. Igualmente queda reconocido para adelantar las acciones pertinentes ante la caja demandada para obtener el cumplimiento de la sentencia que ponga fin a este litigio.

Sirvānse Honorables Jueces, reconocerle personería jurídica al doctor **ALVARO RUEDA CELIS**, en los términos y para los fines señalados en el presente poder.

Respetuosamente,

CC 94442651
Edinson Garcés Ramírez
EDINSON GARCES RAMIREZ

C.C N° 94.442.651 DE BUENAVENTURA
Acepto el anterior poder.

Alvaro Rueda Celis
ALVARO RUEDA CELIS
C.C. 79.110.245 de Fontibón
T.P. 170.560 del H.C.S.J.

20% SALARIO EJERCITO

PBX. (1) 7420825
Cll 73 Bis No. 26-28 Bogotá
direccion@arcabogados.com.co / www.arcabogados.com.co

NOTARIA NOVENA DE CALI

notariacali@yahoo.com.mx

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA**



Ante la Notaria Novena (9) del Circulo de Cali,
Compareció:

GARCES RAMIREZ EDINSON

quien exhibió C.C. 94442651 de BUENAVENTURA
y declaró que la firma y huella que aparecen en el
presente documento son suyas y que el contenido
del mismo es cierto.

feexcdsssew3xwsc

CALI 14/03/2016 a las 3:00:05 p. m.

Nº

Huella

Esta diligencia se tramita a
solicitud del Compareciente
Previo advertencia del
Decreto 2150/95 y Decreto
2148/93

Verifique los datos ingresando a
www.notariaenlinea.com

P7VIF71LCMSJ79JC



2294442651
GARCES RAMIREZ EDINSON
FIRMA

MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
NOTARIA NOVENA DE CALI



Consejo Superior
de la Judicatura

Rama Judicial del Poder Público
Oficina de Apoyo para los Juzgados
Administrativos de Bogotá

Diligencia de Presentación Personal

El documento fue presentado personalmente por

ALVARO RUEDA CELIS

Quien se identificó CC No.: 79.110.245

T.P. No 170.560 Bogotá D.C. 01/04/2016

Responsable **María Raquel Correales Parada**

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.442.651

GARCES RAMIREZ

APELLIDOS
EDINSON

NOMBRES

EDINSON GARCES RAMIREZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1979

BUENAVENTURA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

01-FEB-1997 BUENAVENTURA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3102200-00573254-M-0094442651-20140514

0038608727A 1

41393813

Señor General
ALBERTO JOSE MEJIA FERRERO
Comandante del Ejército Nacional de Colombia
E. S.

GESTION DOCUMENTAL	
REGISTRO COEJC	
VENTANA EXTERNA 002 /	FECHA
D.	06 OCT 2015
FUNCIONARIO	

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 CN Y TAL 10 LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A RELIQUIDACIÓN Y REAJUSTE DEL 20%

Edinson Garces Ramirez, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.442.651 expedida en Buenaventura, elevo ante su Despacho el presente **DERECHO DE PETICIÓN** consagrado en el art. 23 de nuestra Carta Fundamental y en los artículos 1 al 10 de la Ley 1437 de 2001 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, dando a conocer el siguiente requerimiento en los siguientes términos:

I. HECHOS

1. En la actualidad presto mis servicios como miembro activo del Ejército Nacional como Soldado voluntario hasta el año 2003 y posteriormente como soldado profesional de conformidad con el decreto 1794 de 2000.
2. Mediante Decreto 1793 de 2000, el Gobierno Nacional creo dentro de la estructura de la Fuerza Pública la modalidad de "Soldados Profesionales", con el fin de contar con un cuerpo armado especializado y entrenado para el mantenimiento y restablecimiento del orden público.
3. Al homologarme como soldado profesional, al Ejército Nacional de conformidad con lo dispuesto, en el inciso segundo del artículo primero (1) del Decreto 1794 de 2000, me cancelo mis haberes sobre un sueldo básico de un salario mínimo más un 60% del mismo salario.
4. A partir del mes de octubre del año 2003, en forma inconsulta y arbitraria al Ejército Nacional comenzó a liquidar mi asignación mensual, teniendo en cuenta un salario básico establecido en un salario mínimo más 40%, disminuyendo de esta forma mi asignación salarial en un 20% en mi asignación.
5. Con la disminución de mi asignación mensual en un 20% al ejército Nacional desconoció lo consignado por el Ejecutivo en el párrafo segundo del artículo primero (1) del decreto 1794 de 200, "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)." (negrilla y subrayado es nuestro)

20% SALARIO EN ACTIVIDAD

6. Al disminuirse mi asignación básica en un del 20% del salario mínimo legal vigente, me ha afectado mi mínimo vital necesario para sobrevivencia y la de mi familia, dejándome en una situación de desigualdad frente a los demás funcionarios públicos por cuanto no está establecido por la Constitución Nacional y el Código Sustantivo del Trabajo, desmejorar a los funcionarios ya sean estos públicos o privados.

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Invoco como fundamento de derecho los siguientes:

CONSTITUCIÓN POLITICA ARTÍCULO 23, C. P. A. C. A. Artículos 1 al 10.

La Ley 131 del 31 de diciembre de 1985:

ARTICULO 4º .- El que preste el servicio militar voluntario devengara una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal mensual vigente incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar los haberes correspondientes aun Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto

El Decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000:

ARTICULO 1. ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengaran un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%). (Negrilla y Subrayado es nuestro)

LEY 734 DE 2002

Artículo 35 Numeral 8: "Prohibiciones: A todo servidor público le está prohibido. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.". Nuestro ordenamiento jurídico no impide que por mutuo acuerdo, las partes vinculadas por un contrato de trabajo puedan convenir válidamente la rebaja o reducción, sin afectar el mínimo legal, del salario que en un momento dado esté devengando el trabajador. Lo que nuestra ley positiva establece es que el empleador carece de facultad para disponer unilateralmente esa disminución, de manera inconsulta y contra la voluntad del trabajador, de acuerdo con lo preceptuado, entre otras disposiciones, por los arts. 57, 59, 132 y 142 del C.S.T."

20% SALARIO EN ACTIVIDAD

III. PETICIONES

- 1- Solicito de manera respetuosa, se ordene a quien corresponda la reliquidación mi asignación mensual como Soldado Profesional, tomando como asignación básica un salario mínimo más un 60% del mismo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso segundo del artículo primero (1) del decreto 1794 del 2000, en los respectivos años, a partir del mes de octubre de 2003, hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado.
- 2- Se ordene a quien corresponda la reliquidación del auxilio de cesantías tomando para su liquidación una asignación básica mensual de un salario mínimo incrementado en un sesenta por ciento (60%).
- 3- El pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre las liquidaciones solicitadas y las sumas canceladas por concepto del salario mensual desde octubre de 2003 en adelante, hasta la fecha en se ha reconocido el derecho precitado y la reliquidación del auxilio de cesantías.
- 4- En caso que la decisión adoptada sea negativa; de conformidad a lo establecido en los Arts. 14, 42 y 43 del C.P.A.C.A., Ley 1437 de 2011, solicito que se me alienda y resuelva la presente petición de interés particular con la observancia entre otros:

a). Se alienda la petición en debida forma: esto es acorde a los postulados de ley, es decir, mediante decisión motivada por el titular del cargo a quien está dirigida y si es por delegación de funciones, se mencione tal evento y que no sea a través de un acto de trámite, conforme lo dispone el Art. 42 de la Ley 1437/2011.

b). Me permito recordar que es obligación dar una respuesta oportuna, es decir, dentro de los plazos señalados en la ley, es decir, una decisión de fondo con argumentaciones concretas, integral o completa, que no deje puntos sin resolver teniéndose en cuenta lo peticionado, conforme lo dispone el Art. 10 de la Ley 1437/11. **Que constituya un acto administrativo definitivo**, es decir, que contemple una manifestación o declaración unilateral de la voluntad de la Entidad, tendiente a producir efectos jurídicos (crea, modifica o extingue) que pongan fin a lo peticionado, que goce de control jurisdiccional y sea susceptible de recursos, conforme lo dispone el Art. 43 de la Ley 1437/11.

IV. NOTIFICACIONES

Solicito de manera especial de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 24 Numeral 4 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) Las notificaciones las recibiré en la Calle 73 bis No. 26 - 28 Barrio Los Alcázares de la ciudad de Bogotá, tel. 7420825 Ext. 131 - 123. Email alvarorueda@arcabogados.com.co

Del señor General,

Atentamente,

XEDISSAP GALCES RAMIREZ - 94442651

C.C. N°

De BUENAVENTURA

20% SALARIO EN ACTIVIDAD

ARC

Álvaro Rueda C.
Abogados
Especializados

COPIA

CUIDANDO SUS INTERESES.

SEÑORES

DIRECCION DE PERSONAL

SECCION BASE DE DATOS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL

AV. CALLE 26 NO. 52-00 EDIFICIO COMANDO DE LA EJERCITO

Ciudad.-

REF.: DERECHO DE PETICION (ART. 23 C.N.)

ASUNTO: Solicitud de Documentos 20% ACTIVO

GESTION DOCUMENTAL

REGISTRO CCEJC

VENTANA EXTERNA 002 / FECHA

11 OCT 2015

FUNCIONARIO

Edinson Garces Ramirez mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá identificado con la C. C. No. 94442.651 de Buenaventura, por medio del presente escrito me dirijo con todo respeto, haciendo uso del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, para solicitarles se sirva expedirme los siguientes documentos:

1. Certificación laboral donde me encuentro prestando el servicio a la Ejercito Nacional
2. Certificación de la **última unidad**, indicando la **ciudad y departamento** donde presto el servicio en la actualidad.
3. Certificación de las partidas que se computan en el salario, indicando el porcentaje teniendo en cuenta cada una de ellas.

NOTIFICACIONES

Solicito de manera especial de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 24 Numeral 4 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (C.P.A.C.A). Las notificaciones las recibiré en la Calle 73 bis No. 26 - 28 Barrio Los Alcázares de la ciudad de Bogotá, tel. 7420825 Ext. 131 – 123. Email alvarorueda@arcabogados.com.co

Atentamente,

X EDINSON GARCES RAMIREZ

C.C. N° 94442651

De BUENAVENTURA

20% SALARIO EN ACTIVIDAD

ARC

Álvaro Rueda C.
Abogados
Especializados

18/10/2015 3:21 p. m. JHERRERA
SOLICITUD - FOTOCOPIAS AUTÉNTICAS--
DORIS GARCÍA TORRES
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
AHUADO
EMITENTE EDINSON GARCES RAMÍREZ
TRÁSECUIVO: 20150090100 - 0000000 - 000
RUBRO: 1



Nº COMUNICACIÓN 9442651

[Recibido]

Señor Mayor General (r)

EDGAR CEBALLOS MENDOZA

Director Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, EXPEDICIÓN COPIA DOCUMENTOS 20 % ACTIVO

Edinson Garces Ramirez, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94442651 de Buenaventura elevo ante usted las siguientes peticiones:

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS, conforme a lo normado en nuestra carta magna artículo 23 y el artículo 29 del C.P.A.C.A., Copia autenticada de los siguientes documentos que serán sufragados a mi cargo:

- Copia autenticada de la resolución mediante la cual se me reconoció y paga la asignación de retiro.
- Certificación de la última unidad donde preste servicios señalando **Departamento y ciudad**
- Certificación de las partidas que se computan en la liquidación de la asignación de retiro, indicando el porcentaje tenido en cuenta cada una de ellas.
- Copia de la hoja de servicios.

Así mismo autorizo, al señor(a) Chiquiniquita Penaranda, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32.333896 De Bogotá, para retirar la documentación.

Atentamente,

X EDINSON GARCES RAMÍREZ

C.C. N°94442651

De BUENAVENTURA

20% SALARIO EN ACTIVIDAD

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



SECCIÓN NOMINA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20155660969011:MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10

Bogotá, D.C., 08-10-2015

Doctor.

ALVARO RUEDA CELIS

Calle 73 Bis No. 26 – 28, Barrio los Alcázares.
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta Oficio No. 2015115328292-2, del Señor.

EDINSON GARCES RAMIREZ

En atención a su petición recibida en la Sección de Nómina del Ejército, en lo referente al pago del 20% del salario y Reliquidación de su Asignación Mensual como Soldado Profesional y la Reliquidación del Auxilio de Cesantías del reajuste Prestacional de la Asignación Básica desde el mes de noviembre de 2003 hasta la fecha, con base al reajuste solicitado, me permito comunicar que no es posible atender de manera favorable lo solicitado, debido a que la Sección de Nómina de Ejército, exclusivamente presupuesta las partidas incluidas en el sistema de informática del Ministerio de Defensa, el cual no contempla el reconocimiento de dicho salario bajo los parámetros solicitados por usted.

Lo anterior dando respuesta de fondo a lo que a esta Sección compete, siendo relevante indicar que contra la presente comunicación no procede recurso por tratarse de un simple acto de trámite que no revive términos de acuerdo a la normatividad vigente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel **NESTOR JAIME GIRALDO GIRALDO**
Oficial Sección Nómina.

ELABORO. SV. PALOMEDUE JOHN W.

REVISÓ AS. SERGIO ANDRES ISAZA



Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 54 No. 26-25 CAN - Correspondencia Carrera 57 No. 43-28
Teléfono 4261492 dignam@ejercito.mil.co



42

Mr. J. P. ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Nombre/Razón Social
FUNDACIÓN NACIONAL COM-
PLEJO CAN - COMPLEJO
MELIARTE
Dirección CARRETERA A NO-
RISO

Classified by 6031ADG

Departamento BOGOTA D

Código Postal: 11161

Envio.RN1453660598C

DESTINATARIO

NAME: ALAN K. R. DAVIS

Director General de Bienes
Barridos Los Alcazares.

Continued on next page

Departamento BOGOTÁ

Código Postal: 11211

~~Fichte-De-Anniston~~

1471027715 12 10 41

12. *See* R. H. Macdonald, *Language and Literature* (1974), p. 4.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DIRECCIÓN DE PERSONAL



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20155620969251** - MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-1.10

Bogotá, D.C., 08-10-2015

Señor Soldado Profesional
EDINSON GARCES RAMIREZ
Calle 73 bis N°26-28
Barrio Los Alcázares
Bogotá

Asunto: Respuesta Derecho de Petición

Con toda atención y en respuesta a su petición allegada el día siete (7) de octubre del año en curso a la Sección Jurídica de la Dirección de Personal, me permito informar que una vez verificado el Sistema de Información y Administración de Talento Humano del Ejército Nacional SIATH, registra que el BATALLON DE ARTILLERIA N°3 BATALLA DE PALACE con sede en Buga (Valle) es la Unidad actual de la cual es orgánico, en respuesta al numeral uno (1) y dos (2) de su escrito.

Al numeral tres (3), es necesario realizar consignación por valor de dos mil pesos m/cte (\$2.000.00), por cada certificado solicitado, al número de cuenta corriente 310-161112 código 85, NIT: 800130632 del banco BBVA, una vez consignado el valor mencionado se debe anexar a la petición y se procederá a la expedición del mismo.

Cordialmente,

Teniente Coronel **OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RUIZ**
Subdirector de Personal Ejército Nacional

Selenia Reyes F.
Elaboró: AAS, Selenia Reyes F.
Sección Jurídica Dipér

Revisó: PDA, *María Melissa Laguna Fonseca*
Asesora Jurídica Dipér


Vo.Bo: TC, *Carlos Enrique Soto Barrantes*
Jefe Sección Jurídica Dipér



Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras acciones"
Fe en la Causa

Entrada Principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN - Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
Teléfono 4261445 / www.ejercito.mil.co - Mensajería Electrónica Diper@ejercito.mil.co



 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	1 de 2

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

PROCURADURÍA 60 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicación N.º 460499 de 22 de Diciembre de 2015

Convocante (s): EDINSON GARCES RAMIREZ

Convocado (s): NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En los términos del artículo 2.º de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.º del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015¹, el (la) Procurador (a) 60 Judicial I para Asuntos Administrativos expide la siguiente


CONSTANCIA:

- Mediante apoderado, el convocante EDINSON GARCES RAMIREZ; presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el día 22 de diciembre de 2015, convocando a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.
- Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes: Me ratifico en los hechos y peticiones plasmadas en el escrito de solicitud de conciliación que radique ante la Procuraduría y solicito en síntesis las siguientes pretensiones: **1)** Que se declare la revocatoria del Acto Administrativo N° 20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015, mediante el cual, el **COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL** negó las peticiones solicitadas por mi poderdante. **2)** Como consecuencia de la anterior revocatoria, en calidad de restablecimiento del derecho el Comando del Ejército Nacional re liquide el salario mensual pagado a mi poderdante a partir del mes de noviembre de 2003 a la fecha de retiro de la Fuerza, tomando como asignación básica la establecida en el artículo 4º de la ley 131 de Diciembre de 1985 y en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000 (salario mínimo incrementado en un 60 % del mismo salario). **3)** Igualmente se ordene la reliquidación del auxilio de cesantías a partir del año 2003 a la fecha de retiro, tomando para su liquidación como asignación básica un SMLMV incrementado en un 60%. **4)** El pago efectivo e indexado de los dineros que resulten de la reliquidación

¹ Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Antiguo artículo 9º del Decreto 1716 de 2009.

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

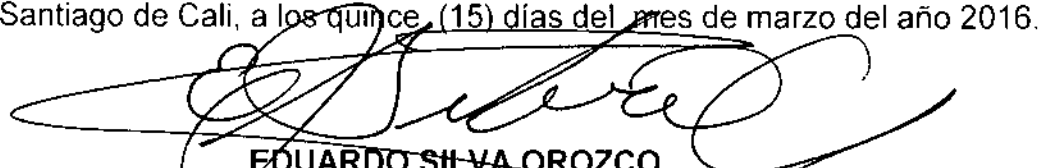
Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	2 de 2

solicitada y las sumas efectivamente canceladas por concepto de salario mensual desde el mes de noviembre del año 2003 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado, de conformidad a lo establecido en el artículo 187 del CPACA. Por lo anterior se solicita la celebración de la audiencia de conciliación a efectos de concretar una fórmula de arreglo frente a las pretensiones de la parte convocante las cuales estima en la suma de **\$22.523.247**.

- Llegado el día de la audiencia de conciliación, el **NUEVE (09) DE MARZO DE 2016 A LAS 03:00 P.M.** no se hizo presente el apoderado de la parte convocante y de la entidad convocada- NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, por lo que se les concedió el término de tres (3) días para que justificara su inasistencia; transcurrido el término anterior, sin que el ausente justificara su no comparecencia, este Despacho, consideró que no existía ánimo conciliatorio de la parte convocada y dio por agotada la etapa conciliatoria.
- De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
- En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos aportados con la conciliación.

Dada en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de marzo del año 2016.


EDUARDO SILVA OROZCO
 Procurador 60 Judicial I para Asuntos Administrativos

Santiago de Cali, <u>8/03/2016</u>
En la fecha recibí la presente constancia y los documentos aportados a la conciliación.
Nombre: <u>Linda María Jaramillo</u>
Cedula: <u>31719816</u>
Firma: <u>Linda María Jaramillo</u>
T.P.: <u>160.500</u>

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

Señores

JUZGADOS ADMINISTRATIVO DE BUGA

Sección Segunda (Reparto)

E.

S.

D.

**MEDIO DE CONTROL: DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO.**

DEMANDANTE : EDINSON GARCES RAMIREZ

DEMANDADO: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONAL

**ASUNTO: RELIQUIDACION DE LA ASIGNACION MENSUAL DE LOS SOLDADOS
PROFESIONAL EN UN 20%**

I. DEMANDA

ALVARO RUEDA CELIS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en nombre y representación del soldado profesional el señor **EDINSON GARCES RAMIREZ**, igualmente mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.94,442,651 DE BUENAVENTURA, conforme al poder que me ha sido conferido y en ejercicio de la **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, ante ustedes presento esta demanda contra **NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL**, representado legalmente por el señor General **ALBERTO JOSE MEJIA FERRERO**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, o quien haga sus veces, para que por los trámites del proceso ordinario, se profiera sentencia sobre las siguientes:

II. PRETENSIONES

- 1) Declarar la nulidad del Acto Administrativo N° **20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015**, mediante el cual, el **COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL** negó las peticiones solicitadas por mi poderdante.
- 2) Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho se condene a la **NACION MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL** a que re liquide el salario mensual pagado a mi poderdante, desde el mes de noviembre de 2003 a la fecha de retiro de la Fuerza tomando como asignación básica la establecida en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000 (salario mínimo incrementado en un 60 % del mismo salario).
- 3) Igualmente se ordene la reliquidación del auxilio de cesantías para los años en reclamación, teniendo en cuenta en su liquidación la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 para los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios. (un salario mínimo legal mensual enfrentado en un 60% del mismo salario)
- 4) Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros que resulten de la diferencia entre la reliquidación solicitada y las sumas efectivamente canceladas por concepto de Salario Mensual desde noviembre del año 2003 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado, de conformidad a lo establecido en el artículo 187 del CPACA en concordancia con el 280° de CGP.
- 5) Ordenar el pago de los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reconocimiento de la aplicación de los porcentajes mencionados en los numerales anteriores, a partir de la

20% SALARIO

ejecutoria de la respectiva sentencia, en la forma y términos señalados en el artículo 192° y 195° del CPACA y demás normas concordantes establecidas en el CGP. (Sentencia C- 188/99, expediente 2191 del 24 de marzo de 1999).

- 6) Se ordena al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a adicionar mi hoja de servicios con la nueva base de liquidación y él envió de copia de la misma a la caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que sea tenida en cuenta en la liquidación de mi asignación de retiro.
- 7) Ordenar a la Entidad demandada el pago de gastos y costas procesales, así como las agencias en Derecho.

III. HECHOS

1. El señor **EDINSON GARCES RAMIREZ**, prestó servicio militar obligatorio en las filas del Ejército Nacional como soldado regular.
2. Una vez terminado el periodo reglamentario como soldado regular mi poderdante fue incorporado como soldado voluntario de conformidad con lo establecido en la ley 131 de 1985.
3. A partir del 01 de noviembre de 2003 por disposición administrativa del Comando del Ejército Nacional, mi poderdante fue promovido como soldado profesional, condición que mantuvo hasta su retiro de la Fuerza.
4. Mediante Decreto 1793 de 2000, el Gobierno Nacional creo dentro de la estructura de la Fuerza Pública la modalidad de "Soldados Profesionales".
5. El decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, por el cual "establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de la Fuerzas Militares", fijo la asignación básica para los soldados profesionales en un salario mínimo incrementado en un **40%** del mismo salario.
6. En el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 el legislador dejó establecido un régimen de transición para los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 tenían la condición de soldados voluntarios indicando que estos seguirían percibiendo como asignación básica el salario mínimo incrementado en un **60%** del mismo.
7. Mi poderdante durante el tiempo que permaneció como soldado voluntario percibió una asignación ménsula igual a un salario mínimo incrementado en un 60% del mismo salario, el cual le fue cancelado hasta el 31 de octubre de 2003.
8. A partir del primero de noviembre de 2003 fecha en la que mi poderdante obtuvo el estatus de soldado profesional, el Comando del Ejército Nacional le disminuyo la asignación básica a mi poderdante de un salario mínimo incrementado en un **60%** del mismo salario a un salario mínimo incrementado en un **40%**.
9. El Comando del Ejército Nacional anualmente le liquido el auxilio de cesantías a mi poderdante sobre la asignación básica de un salario mínimo más un 40% del mismo salario.
10. Con fecha 06 DE OCTUBRE DE 2015, mi poderdante radico derecho de petición ante el Comando del Ejército Nacional solicitando la reliquidación de su salario mensual tomado como asignación básica el salario mínimo incrementado en un 60% del mismo, a partir del mes de noviembre de 2003, igualmente la reliquidación del auxilio de cesantías.
11. EL EJÉRCITO NACIONAL, por intermedio de la Sección Nomina dio respuesta al derecho de petición, mediante oficio No. 20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015, negando las peticiones solicitadas en el derecho de petición, agotándose de esta forma la vía administrativa.

20% SALARIO

12. Con fecha **22 de diciembre de 2015**, dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1285 de 2009 se presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial

13. El día **15 de marzo de 2016**, ante la procuraduría **60** delegada ante los juzgados Administrativos, se realizó audiencia de conciliación, declarándose fallida en razón a que la entidad convocada no presentó ánimo conciliatorio, como consta en el acta No. **460499** que se anexa, dándose de esta forma cumplimiento al requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161º del CPACA y exigido en el numeral 7º del artículo 90º del CGP.

IV. NORMAS VIOLADAS

Considero que con el desconocimiento del mandato constitucional y de normas legales que protegen la seguridad social, **EL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL** ha trasgredido nuestra Constitución Política en su preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 13º, 25º, 46º, 48º, 53º y 58º. Igualmente desconoció lo contemplado en las Leyes 131 de 1985, Ley 4º de 1992 y los decretos 1793 y 1794 de 2000.

V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

1. ESTADO SOCIAL DE DERECHO

"ARTICULO 1º. Colombia es un Estado social de Derecho,..."

El Gobierno Nacional con el propósito de enfrentar a la guerrilla que por varias décadas ha generado altos niveles de violencia en todo el territorio nacional, vio la necesidad de contar con un ejército profesional altamente entrenado en operaciones contrainsurgentes como una de las estrategias tendientes a neutralizar y destruir a estos grupos criminales; por ello mediante Decreto 1793 de 2000 creó la modalidad de soldados profesionales, cuerpo conformado por los soldados regulares que terminan el Servicio Militar Obligatorio y manifiestan su intención de continuar en el Ejército Nacional y por los antiguos Soldados Voluntarios que manifestaron su deseo de continuar laborando en las Fuerzas Militares, hombres capacitados y entrenados en operaciones contrainsurgentes.

El Ejecutivo dejó establecido en el **PARAGRAFO del artículo 5º del Decreto 1793 de 2000** la posibilidad para que los soldados voluntarios vinculados mediante la ley 131 de 1995, se incorporaran como soldados profesionales, y con el fin de garantizarles los derechos adquiridos en contemplación un régimen de transición que les tendría en cuenta la antigüedad, el porcentaje de prima de actividad que tenían reconocido al momento de su incorporación como soldado profesional,

Mediante Decreto 1794 de 2000 el Gobierno Nacional estableció el Régimen Salarial y Prestacional para el personal de Soldados Profesionales pertenecientes a las Fuerzas Militares, estableciendo en el artículo primero como asignación básica el salario mínimo incrementado en un **40%** del mismo salario para quienes ingresaran a este cuerpo a partir del 01 de enero de 2001. Con el fin de respetar los derechos ya adquiridos de quienes a 31 de diciembre del 2000 tenían la calidad de soldados Voluntarios, en el inciso segundo del mismo artículo el Ejecutivo estableció un régimen de transición para los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios indicando que estos devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un **60%** del mismo.

Por una mala interpretación de la norma, el Comando del Ejército Nacional en forma arbitraria e inconsulta, contrariando lo dispuesto en la norma ya citada, a partir del mes de noviembre de 2003 le disminuyó a mi poderdante la asignación básica mensual de un SMLV incrementado en un **60%** a un SMLV incrementado en un **40%**, con este desmejoramiento de un **20%** de su asignación básica, afecto en forma significativa el mínimo vital de estos servidores públicos que mantiene el orden constitucional en las difíciles condiciones laborales que ponen en riesgo su integridad personal.

Señor Juez, al disminuirseles la asignación básica a los soldados se contraviene de manera directa los principios fundamentales propios ya no tanto de un Estado Social de Derecho sino de un Estado Constitucional de Derecho, el cual tiene como premisa fundamental la obediencia a las normas con el respeto por la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia del interés general, que en resumidas cuentas consiste en un Estado protector garante férreo de todas las prerrogativas fundamentales conferidas por nuestra carta de derechos.

En este sentir la Corte Constitucional en sentencia SU-747 de 1998, definió el Estado Constitucional de Derecho de la siguiente manera:

La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho.

Todo Estado Social de Derecho se erige sobre valores tradicionales como son la libertad, la igualdad y la seguridad, que tiene como gran propósito, el procurar las condiciones materiales generales para lograr la efectividad y la adecuada integración del bienestar social; por lo que a la luz de esta finalidad, no podrá reducirse el Estado Social de Derecho a una mera instancia prodigadora de bienes y servicios, ya que al ser un defensor de los derechos, le es inaceptable que los funcionarios que hacen parte de sus instituciones como lo es el Comando del Ejército Nacional, omitan los derechos que han sido adquiridos por parte de los administrados que durante un largo trasegar cotizaron en las mismas instituciones.

Es por ello que en la consolidación del Estado Social de Derecho, no es dable concebir el desconocimiento de las garantías constitucionales como lo son los derechos económicos, sociales y laborales, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la seguridad social y los beneficios que este mismo arroja. Es así como dentro del grupo de la seguridad social, encontramos el derecho de mantener la asignación básica mensual sin que el salario sea desmejorado, constituye un derecho adquirido que no podrá ser desconocido en el marco de los principios del citado Estado Social de Derecho, que busca darle al ciudadano una protección conforme a los principios de favorabilidad y progresividad.

En este caso, **EL EJERCITO NACIONAL** al no aplicar el régimen de transición prestacional que el ejecutivo estableció en el inciso segundo del artículo 1° del decreto 1794 para los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios en la liquidación del salario mensual está atentando contra los postulados que del Estado Social de Derecho que el Constituyente Primario diseñó en la Constitución Política.

Bajo los postulados del Estado Social de Derecho no se entiende como el Comando del Ejército Nacional en forma caprichosa y en forma arbitraria le disminuya la asignación básica mensual a los soldados profesionales que con anterioridad fueron soldados voluntarios. De ser esto válido se estaría desconociendo los principios constitucionales de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que fueron establecidos en los artículos 48 y 53 de la carta.

1. FINES ESENCIALES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 2º. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover el desarrollo la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución...Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Con relación a este artículo de nuestra Constitución y de acuerdo a los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, entre los fines esenciales del Estado de Derecho, encontramos la protección de los derechos económicos de todos los colombianos. Bajo este supuesto, los salarios no son un privilegio o premio que recibe el trabajador que ha dedicado

parte de su vida al servicio de una persona natural o jurídica, pública o privada, sino que es una prestación social básica que opera como compensación al esfuerzo de la actividad diaria.

En efecto, **EL EJERCITO NACIONAL** al efectuar la liquidación del salario mensual de mi poderdante tomando como asignación básica la que le corresponde a los soldados profesionales que no fueron soldados voluntarios, y no la establecida en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, está infringiendo el artículo 2° de la Carta Magna, relacionado con los *Fines Esenciales del Estado*, en la medida en que la Carta Constitucional, garantiza a todos los ciudadanos la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en su interior.

Ahora bien, cuando se deja establecido los parámetros normativos, de cómo es que en realidad debe aplicarse la liquidación del salario mensual y estos son desconocidas por la administración estatal, nos encontramos ante la vulneración de un derecho laboral, que cuenta con una protección especial establecido en el artículo 53 de la constitución política.

2. ARTICULO 48 DERECHO IRRENUNCIABLE A LA SEGURIDAD SOCIAL. (PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD)

El principio de progresividad de los derechos sociales está establecido en el artículo 48° de la Constitución Política de Colombia y desarrollado en numerosos instrumentos internacionales, el cual, a consideración de nuestra Corte Constitucional consiste básicamente en que el Legislador no puede desmejorar los beneficios señalados previamente en leyes, sin que existan razones suficientes y constitucionalmente válidas para hacerlo.

De conformidad con el artículo anteriormente citado, la seguridad social goza de una doble naturaleza; de una parte, es un servicio público que debe ser prestado de manera obligatoria por parte del Estado y de los particulares autorizados para para ejercer el mismo fin, y de otra, es un derecho que debe ser garantizado a todos los habitantes de manera progresiva y generalizada.

Ahora bien, el principio de progresividad genera una prohibición general de establecer medidas regresivas en desconocimiento de las prerrogativas que se hayan logrado a favor de los asociados. Así lo ha establecido en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional:

“El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social, debe ser complementada con la posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas, cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción. El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional. (La negrilla y subrayado es nuestro)”

De esta forma, el legislador primario al consagrar de manera conjunta el principio de progresividad dentro de la cobertura de la Seguridad Social, se está consolidando de manera definitiva la prohibición, para que mediante una ley posterior o que un juez de la república por vía de un fallo judicial, adopte medidas que constituyan un retroceso frente a los logros y derechos obtenidos en materia de derechos sociales prestacionales, sin que existan razones suficientes y constitucionalmente válidas que legitimen una desmejora en las condiciones salariales y pensionales ya adquiridas, estando consagrados estos supuestos, tanto en la Constitución Política como en otros cuerpos normativos internacionales a los que hace alusión el Bloque de Constitucionalidad, con motivo a que la consagración de este precepto dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tiene su fundamento, además del reconocimiento expreso por el constituyente en la Carta Política, en instrumentos de carácter internacional de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por esta circunstancia y atendiendo al mandato de la progresividad y de manera subsiguiente la no regresividad, se permite deducir que una vez que el trabajador alcance determinados beneficios en cuanto a las prestaciones sociales, se consolidarán sobre éste, unas garantías y una protección constitucional para que las mismas no puedan ser desmejoradas y disminuidas de conformidad con la proporción en que las venía percibiendo; en otras palabras, todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es inconstitucional y contradice los parámetros normativos consagrados por el Estado colombiano.

Así pues, en este sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-221 de 2006 al referirse a la progresividad de la seguridad social, aspecto sobre el cual señaló que de una parte, el deber del Estado de avanzar en la materialización del derecho en cabeza de todas las personas, procurando el alcance de mayores beneficios por parte de la población y, de otra, **la prohibición general, en principio, de establecer medidas regresivas, es decir, medidas que desconozcan reconocimientos que se hayan logrado a favor de los asociados.** (Negrillas fuera de texto)

En síntesis, el mandato de progresividad al depender de manera intrínseca de los cometidos estatales, puesto que es el encargado de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos y sociales de los trabajadores ante la negativa o retroceso fruto de la actividad del empleador, no es entendible que el Comando del Ejército Nacional se encargue de hacer más lesiva las condiciones de trabajo, reduciéndoles las garantías y derechos adquiridos por los soldados afectados, con motivo a una nueva figura que entra en vigencia y que de cierta forma hace una disminución en el monto de los salarios que irían a percibir.

En el caso que nos ocupa mi poderdante hasta el 31 de octubre de 2003 recibió como asignación mensual un salario mínimo incrementado en un 60% del mismo salario de conformidad con lo establecido en la ley 131 de 1985 y en el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 de 2000, que a su vez a partir del mes de Noviembre de 2003, el Comando del Ejército en forma arbitraria e inconsulta le disminuyó la asignación mensual a un salario mínimo incrementado en un 40%, afectando con ello su mínimo vital.

El hecho de que mi poderdante hubiera optado por la condición de soldado profesional a partir de noviembre de 2003, no puede ser tomado como justificación para la disminución de su asignación básica, ya que a 31 de diciembre de 2000 ya ejercía como soldado del Ejército Nacional, y por lo tanto el salario que se le debe cancelar es el establecido en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794. Es de anotar que mi poderdante no tenía opción para decidir su vinculación como soldado profesional, ya que lo aceptaba o se tendría que retirar, quedando sin actividad laboral.

Este tratamiento arbitrario lo sufrió mi poderdante hasta su retiro por las siguientes razones; 1-Por desconocimiento de las normas, en razón a su muy particular actividad laboral, que hace que el mayor tiempo el pase en la selva sin tener contacto con la realidad nacional. 2- La imposibilidad de presentar reclamación, ante el principio de obediencia debida, que le obliga a total obediencia. 3-Por temor a ser señalado de insubordinación y ser dado de baja mediante la aplicación del poder discrecional del Comandante de la Fuerza. 4-Porque no fueron informados del hecho de la disminución de su asignación mensual, ya que esta medida fue arbitraria e inconsulta. 5-Ante la imposibilidad de poderle reclamar a sus superiores por lo que ellos consideran justo, pero que afecta el mínimo vital de mi poderdante.

Por las anteriores razones fue que esta situación jurídicamente anormal se ha prolongado en el tiempo, y ahora que mi poderdante se encuentra en retiro gozando de una pensión, está en libertad de exigir que se le restablezca los derechos que le han sido violados. Señor Juez teniendo en cuenta que la seguridad social es un derecho irrenunciable, y ante la posición dominante de los mandos del Ejército Nacional, mi poderdante ha tenido que esperar a encontrarse en situación de retiro para tramitar la presente demanda.

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C- 228 del 30 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez, en relación al principio de progresividad fijó la siguiente jurisprudencia:

“2.1. El principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales (DESC) y la prohibición concomitante de la regresividad de éstos derechos se encuentra consagrado en el artículo 48 de la C.P que establece que, “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará **progresivamente la cobertura de la seguridad social...”.**

2.2. Igualmente se debe tener en cuenta que el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los DESC se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad¹, ya que específicamente se encuentran estipulados en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece que, “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, **para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Del mismo modo en el artículo 11.1 del PIDESC se establece que, “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a **una mejora continua de las condiciones de existencia...**”².**

2.3. Por otra parte se ha venido introduciendo dicho principio a través de la recepción de los criterios dados por los Principios de Limburgo de 1987 y las Directrices de Maastricht de 1997, que son recomendaciones de implementación y comprensión de los derechos consagrados en el PIDESC elaboradas por expertos en el campo del derecho internacional y que se han convertido en una fuente directa para comprender la forma de aplicación e interpretación de estos derechos. Por ejemplo en la Directriz No 9 de Maastricht se estableció que el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, estipulado en el artículo 2 del PIDESC, no debe ser utilizado como pretexto para su incumplimiento, y que se debe garantizar los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos si no se cuenta con todos los recursos para atender a estos derechos³.

2.4. Del mismo modo el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, a través de sus Observaciones Generales, ha establecido criterios de interpretación del principio de progresividad, como el que se dio en la Observación No 14 relativa al derecho a la salud⁴ en donde se dijo que “la progresividad no priva de contenido la obligación estatal, y por ello las medidas regresivas, que disminuyen una protección a la salud ya alcanzada, se presumen contrarias al Pacto”. En estos eventos estableció el Comité, que el Estado tiene que demostrar que esas medidas eran necesarias y que “se han aplicado tras el examen exhaustivo de todas las alternativas posibles”⁵.

2.5. Finalmente se debe tener en cuenta que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra consagrado dicho principio cuando en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) se establece que, “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr **progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. Del mismo modo se consagra dicho postulado en el artículo 4º del Protocolo de San Salvador, que establece que, “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los**

¹ El artículo 93 de la C.P. establece que, “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Con base en esta norma se ha introducido en Colombia la idea de que dichos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, hacen parte del Bloque de constitucionalidad.

² Ver sobre el tema el libro compilado por Christian Courtis titulado “Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”, Buenos Aires, CELS, 2006.

³ Esta misma idea se da en la Observación General No 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que estableció que, “El concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo. Sin embargo, el hecho de que el Pacto prevea que la realización requiere un cierto tiempo, en otras palabras sea progresiva, no debe ser malinterpretado en el sentido de privar a la obligación de todo contenido significativo...”.

⁴ Dicha observación se produjo el 11 de mayo de 2000 en el período No 22 de Sesiones en donde el Comité adoptó la “Observación General No 14 relativa al disfrute del más alto nivel de salud (art. 12 de la Convención)”.

⁵ Párrafo 32. Observación citada en la Sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, so pretexto de que el Presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”.

2.6. En cuanto a la recepción de dicho principio en la jurisprudencia constitucional se debe citar en primer lugar la Sentencia SU-225 de 1997⁶ que establece que la progresividad de los derechos sociales hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de éstos derechos e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o conseguido. Igualmente se ha acogido dentro de la jurisprudencia de la Corte la interpretación del principio de no regresividad que han dado los organismos internacionales en el sentido de que el mandato de progresividad de los DESC no excusa al Estado del cumplimiento del deber de que con el máximo de los recursos disponibles se provea por la cobertura universal de los contenidos de éstos derechos⁷.

2.7. Del mismo modo la jurisprudencia constitucional estableció que el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho social existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso y la necesidad de realizar un juicio de constitucionalidad más severo en el caso de que se presenten legislaciones regresivas de éstos derechos⁸. Sobre esta presunción de inconstitucionalidad *prima facie* del retroceso en materia de derechos sociales se dijo en la Sentencia C-038 de 2004 que, (negrilla y subrayado es nuestro)

“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social”.

2.8. Igualmente en la Sentencia C-038 de 2004⁹ se empezó a sentar las bases de un “test de no regresividad”, para que el control de constitucionalidad sea más estricto¹⁰. En dicha Sentencia la Corte estableció que cuando se constata la regresividad de un derecho de pensiones a través de una reforma, se debe estudiar (i) si con la reforma no se desconocieron derechos adquiridos; (ii) si se respetaron con la reforma los principios constitucionales del trabajo;¹¹ y (iii) si las reformas se encuentran justificadas conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad.

De conformidad a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia transcrita, la disminución del salario mensual a mi poderdante es violatorio del principio de progresividad y no regresividad, que hacerlo tal como lo hizo el Comando del Ejército Nacional, es violatorio de la constitución. Por las anteriores consideraciones se solicita al señor Juez para que se corrija esta violación y se ordene la correcta liquidación del salario mensual de mi poderdante.

⁶ M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta Sentencia también se consagró la “Cláusula de erradicación de las injusticias presentes”, en donde se ordena a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita para prevenir meningitis a niños pertenecientes a sectores históricamente marginados. Como se establece en la Sentencia C-727 de 2009 (M.P. María Victoria Calle), esta jurisprudencia ha sido reiterada en otras sentencias, como por ejemplo la T-177 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-840 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-772 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda).

⁷ Por ejemplo en la Sentencia C-671 de 2002 en donde se dijo que, “La progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derecho...”. En el mismo sentido la Sentencia C-251 de 1997 (F.j. 8 y 9), Sentencia SU-225 de 1998 (F.j. 11), Sentencia SU-624 de 1999, C-1165 y C-1489 de 2000.

⁸ Por ejemplo en la Sentencia C-251 de 1997 (F.j. 8), SU-624 de 1999, C-1165 y 1489 de 2000 y C-671 de 2002.

⁹ M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

¹⁰ Negrillas fuera del texto.

¹¹ En el artículo 53 de la C.P. se consagra los principios de igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en casos de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales.

3. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL/PRINCIPIO IN DUBIO PROOPERARIO. ARTICULO 53 C.P

Señor Juez, el artículo 53° de la Constitución Política, trae resuelto el problema que se le podría presentar al administrador en cuanto a la duda, de cual norma aplicar, cuando existe duda en su aplicación o cuando de la misma norma se desprenden varias interpretaciones. En el caso que nos ocupa, **NACION MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL** al realizar la liquidación de las asignaciones básicas de los soldados profesionales que ingresaron a las filas de la Fuerza Pública antes del 31 de diciembre de 2000, se le presentan dos circunstancias:

Liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales de conformidad con el salario mensual en los términos del primer inciso del artículo 1° del Decreto Ley 1794 de 2000, en donde se estipula que los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

- Liquidar la asignación de retiro a los soldados profesionales que siendo soldados voluntarios se acogieron a la nueva figura de soldados profesionales de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 de 2000, Siendo esta más favorable para mi poderdante.

Válido es recordar que es el artículo 53 de la Carta Magna quien precisa la aplicación del principio DE FAVORABILIDAD en materia laboral, cuando señala los principios mínimos fundamentales, disponiendo:

"(...) Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social"

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C – 862 del 19 de octubre de 2006 Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto se pronunció sobre la aplicación del principio de favorabilidad de las normas en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, así:

Igualmente para la configuración del derecho constitucional de los "pensionados al mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional resultan también relevantes principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991, algunos de los cuales encuentran aplicación específica en derecho laboral, como el principio in dubio pro operario (art. 48 de la C.P.), mientras que otros son principios fundantes del Estado colombiano y tiene vigencia en todos los ámbitos del derecho y deben guiar la actuación de los poderes públicos y de los particulares, tales como el principio de Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C. P.), el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P.) Y el derecho al mínimo vital. (El subrayado es nuestro)

En efecto, no sobra recordar, que en virtud del principio in dubio pro operario¹² entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie¹³. Entonces, como ha sostenido esta Corporación "[e]l sentido protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación; porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser éste el que genera la injusticia que se pretende corregir"¹⁴, por tal razón la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la normatividad vigente en materia laboral ha de ser interpretada en el sentido de reconocer un derecho al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones".

¹² Previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino también en el artículo 21 del C. S. T.

¹³ Cfr. SU-120 de 2003.

¹⁴ Ibidem.

Tal como consta en los fundamentos sostenidos por la Corte Constitucional, el principio de favorabilidad en materia laboral estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, opera en caso de duda tanto en la aplicación como en la interpretación del derecho y se refiere a la condición más favorable o más beneficiosa en el ámbito laboral y al no menoscabo por la ley en su aplicación para con los derechos de los trabajadores, la cual infiere que las normas de carácter laboral o pensional no pueden disminuir las condiciones favorables consolidadas y constituidas previamente en cabeza de los trabajadores, de modo que las reglamentaciones más beneficiosas para el trabajador deberán ser reconocidas y respetadas por cualquier operador jurídico.

Al igual que frente al principio de progresividad, la Corte explicó en el fallo de constitucionalidad C-428 de 2009, que el principio de favorabilidad en materia laboral no impide, per se, la modificación de la normatividad existente, más aun si la nueva regulación resulta menos favorable al trabajador, ya que este principio tiene el sentido de asegurar el deber de los operadores jurídicos de aplicar en caso de duda y de coexistencia de varias disposiciones, la fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador, o la interpretación de esas fuentes que le sea más favorable (in dubio pro operario), pero no necesariamente impedir las transformaciones legislativas cuando estén justificadas a luz de los criterios constitucionales que limitan el margen del Legislador.

Señor Juez, ante la duda que se le podría presentar al **EJERCITO NACIONAL**, respecto de cuál norma se podría aplicar en el momento de liquidar las asignaciones básicas de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000, tenían la calidad de soldados voluntarios, ha debido de emplear la más favorable, es decir tomando como base de liquidación el salario mínimo incrementado en un 60% del mismo salario, en aplicación del principio de favorabilidad.

En este orden de ideas, consideramos que la entidad demandada, al realizar la liquidación de la asignación básica, con base en un porcentaje por debajo al que se le reconoció a los soldados voluntarios, actuó en abierta contradicción con el artículo 53 de la Constitución, que contempla en materia laboral el principio de favorabilidad que le asiste a mi poderdante de acuerdo a los planteamientos expuestos.

Igualmente es de resaltar que el derecho a que a mi poderdante se le liquide su salario mensual tomando como asignación básica el SMNV incrementado en un 60% se sustenta en el régimen de transición que el Ejecutivo Contemplo en el inciso segundo del artículo 1º del decreto 1794 de 2004 para aquellos soldados profesionales que previamente fueron soldados voluntarios, por lo tanto lo que se solicita es que se ordene al Comando del Ejército a cumplir con la ley.

4. DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

Con sustento en el artículo 58º de la Constitución Política de Colombia anteriormente reseñado y de acuerdo a una interpretación conjunta y sistemática de los mandatos constitucionales expresados en los artículos 48 y 56, nuestra carta suprema de derechos le garantiza a cualquier ciudadano la protección inmediata y el reconocimiento de los derechos adquiridos de cualquier índole, mucho más si todas estas prerrogativas extienden su campo de aplicación a temas relacionados con el derecho, como lo es de contar con una seguridad social progresiva, eficiente y universal, que haga eficaz el hecho en que cuando se adquieran ciertas potestades a nivel laboral, éstas mismas sean respetadas y no puedan ser desmejoradas con fundamento en la progresividad y en la prohibición de regresividad amparadas por nuestro Estado.

Es así como nuestra Constitución Política, prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales o con la aplicación de una norma que desconozca las garantías

adquiridas que impliquen un retroceso o desmejoramiento que omita la interpretación de la norma más favorable de acuerdo al principio ya explicado del *In dubio pro operario*.

En sentencia C-242 de 2009, magistrado ponente Dr. Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional precisó que los *derechos adquiridos* son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley. Existe un derecho adquirido cuando respecto de un determinado sujeto, los hechos descritos en las premisas normativas tienen debido cumplimiento. Por contraste, las *meras expectativas*, consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador con sujeción a parámetros de justicia y de equidad.

Por lo tanto pretender aplicar la idea de la **NACION MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONAL**, en cuanto a que los soldados voluntarios deben percibir una asignación básica diferente a la que estipula la ley, contradice el mandato constitucional de los derechos adquiridos, la progresividad y la favorabilidad con que deben ser aplicadas e interpretadas las leyes, generando de esta forma y según nuestra consideración, una omisión de los mandatos impuestos por el legislador primario y una aplicación arbitraria del derecho que deslegitima desde cualquier punto de vista el Estado Social de Derecho sobre el cual se ha edificado nuestra sociedad colombiana, deslegitimando cualquier actuación por parte de la administración con fundamento en la limitación inconstitucional de los derechos fundamentales.

Señor Juez los soldados profesionales que ingresaron al servicio de la Fuerza Pública antes del 31 de diciembre de 2000, tiene el derecho que se les cancele y se les tenga como base de liquidación en el reconocimiento de sus asignaciones de retiro, la asignación mensual consignada en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 de 2000. Por lo anterior solicitamos al Despacho, que a manera de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada a liquidar la asignación básica de mi poderdante de conformidad con las peticiones presentadas en la presente demanda.

5. JURISPRUDENCIA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DE UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN APLICABLE A LOS SOLDADOS PROFESIONALES QUE FUERON SOLDADOS VOLUNTARIOS.¹⁵

¹⁵ RELACION DE FALLOS DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO Y DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 20% SALARIO PARA INCLUIR EN LAS DEMANDAS.

1. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA-SUBSECCIÓN "B", providencia de fecha 16 de marzo de 2015, radicado 2014-02434-01, actor JOSE EFRAIN BOTACHE TAPIERO, Magistrado Ponente Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE.
2. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "B" CONSEJERO PONENTE: DR. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN en providencia del veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-15-000-2015-00801-01 Actor: JOSE EDGAR MONCADA RANGEL Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ACCIÓN DE TUTELA – Fallo Primera Instancia.
3. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA, providencia de fecha 29 de abril de 2015, radicado 2014-02433-01, actor NELSON GONZALEZ JAIMES, Magistrada Ponente Dra. JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ.
4. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA, providencia de fecha 17 de Octubre de 2013, radicado 11001031500020120118901, actor CECILIO CABEZAS QUIÑONES, Magistrada Ponente Dra. JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ.
5. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA en providencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) Tutela contra providencia judicial - fallo de segunda instancia Radicación No. 11001-03-15-000-2014-02294-01 Tutelante: Gerardo Chacón Tutelados: Tribunal Administrativo de Casanare
1. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 25 de Junio de 2012, , radicado 2010 – 00421 - 01, actor JAIRO LINARES SALDAÑA, Magistrado Ponente Dra. LUCENY ROJAS CONDE.
2. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "A", providencia del 14 de Junio de 2012, radicado 2010 – 00523 - 01, actor OSCAR HERNANDO ZARATE BELTRAN, Magistrado Ponente Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA.
3. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

El Honorable Consejo de Estado en sentencias de tutela a través de sus diferentes subsecciones se ha pronunciado sobre el establecimiento de un régimen de transición consignado por el legislador en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 de 2000 aplicable a los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios, en el que se dispone que el salario básico de estos soldados sería el de un salario mínimo mensual vigente incrementado en un 60%.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Código general del Proceso me permito transcribir aparte de los fallos emitidos por el órgano de cierre de la Jurisdicción Administrativa para que obre como jurisprudencia sobre el tema motivo de la presente Litis, así:

A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "B CONSEJERO PONENTE: DR. GERARDO ARENAS MONSALVE en providencia del dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-15-000-2014-02434-01 Actor: JOSÉ EFRAIN BOTACHE TAPIERO Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia

"Decide la Sala la impugnación presentada contra el fallo del 13 de noviembre de 2014, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio del cual se accedió el amparo solicitado.

De la lectura de las disposiciones citadas, se advierte que aunque la incorporación de los soldados voluntarios como profesionales trajo consigo el reconocimiento de prestaciones sociales contempladas en el referido Decreto, lo cierto es que respecto a la asignación básica mensual, el personal que estuviera vinculado como soldado voluntario en los términos de la Ley 131 de 1985 al 31 de diciembre de 1985, y luego fue vinculado en calidad de soldado profesional, tiene derecho a recibir un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).

Ahora bien, el Tribunal concluyó que el actor estaba cobijado por el régimen de los soldados profesionales (Decretos 1793 y 1794 de 2000,) que en esas condiciones contaba con beneficios que no tuvo como soldado voluntario bajo la Ley 131 de 1985, y que por ende, no podía devengar un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%),

Al respecto, se advierte que la norma inaplicada, estableció el régimen de transición para aquellos soldados que habían sido voluntarios y que posteriormente se incorporaran como profesionales, y previó que sólo en ese evento, el salario que éstos recibirían sería el de un salario mínimo mensual incrementado en un 60%, a diferencia de aquellos que ingresaron a la institución sin que previamente hubiesen prestados sus servicios como soldados voluntarios, pues para ellos el pago sería de *"un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario"*.

Así las cosas, evidente para la Sala es que el Tribunal accionado, incurrió en defecto sustantivo al implicar, sin razón alguna, el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, en abierta contradicción con su propia argumentación según la cual dicha normativa regía por completo la situación del señor Cabezas Quiñones.

CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 31 de Mayo de 2012, , radicado 2011 – 00108 - 01, actor FABIO ALBERTO YANES CANTERO, Magistrado Ponente Dra. LUCENY ROJAS CONDE. 4. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 26 de Abril de 2012, radicado 2010 – 00431 - 01, actor LUIS ANTONIO SOSA GALVIS, Magistrado Ponente Dra. LUCENY ROJAS CONDE. 5. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 24 de Abril de 2012,, radicado 2010 – 00431 - 01, actor JHON JAIRO GOMEZ PEÑA, Magistrado Ponente Dra. LUCENY ROJAS CONDE. 6. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 12 de Junio de 2012, radicado 2011 – 00386 - 01, actor GERARDO JIMENEZ DUEÑAS, Magistrado Ponente Dra. LUCENY ROJAS CONDE. 10. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION "F" EN DESCONGESTION, providencia del 19 de Junio de 2012, , radicado 2010 – 00280 - 01, actor JUAN CARLOS PELUFO SOTO MAYOR, Magistrado Ponente Dra. MARTHA JEANNETTE GONZALEZ GUTIERREZ.

En similar sentido, la Sección Primera ha advertido, siguiendo la posición de la Sección Quinta, que la interpretación que el Tribunal Administrativo del Casare hizo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 es errónea y además omite dar cumplimiento al inciso segundo de la citada norma:

*"Resulta claro para la Sala, así como lo fue para la Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia citada en precedencia, que el Tribunal accionado incurrió en una imprecisión al considerar que debía aplicar el régimen más favorable entre el establecido en el Decreto 1794 de 2000 y la Ley 131 de 1985, pues de la simple lectura de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, se advierte claramente que no hay contraposición entre los regímenes, pues lo que pretende el Legislador es la salvaguarda de los derechos adquiridos por los soldados que con anterioridad al 31 de diciembre del año 2000, prestaban sus servicios como voluntarios y que con posterioridad a dicha fecha expresaran su intención de incorporarse como soldados profesionales, evento en el cual se les aplicará en su totalidad el Decreto 1794 de 2000, como lo indica el parágrafo del artículo 2°, pero su asignación mensual **no equivaldrá a un salario mínimo incrementado en un 40%, sino en un 60%, toda vez que la primera solamente aplica para los soldados que no fueron voluntarios con anterioridad al 31 de diciembre de 2000.***

Visto lo anterior, resulta forzoso concluir que el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto sustantivo que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Administración de Justicia del actor, razón por la que se dejará sin efecto la sentencia de 10 de julio de 2014 y, en su lugar, se le ordenará que emita un fallo en consideración a los lineamientos aquí expresados.¹⁶

Igualmente, esta Subsección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la sentencia del 21 de octubre de 2014, en los siguientes términos:

"En virtud de lo expuesto, observa la Sala, que en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, se estableció que aquellos Soldados que a 31 de diciembre de 2000, se desempeñaban como voluntarios y que posteriormente se incorporaran como profesionales, tendrían derecho a percibir un salario mínimo mensual incrementado en un 60%; mientras que, en tratándose de Soldados que ingresaron a la institución -que no hubieran prestado sus servicios en calidad de voluntarios- se determinó que devengarían un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40%.

En tal sentido, se evidencia, que dentro del proceso se acreditó que el demandante cumplió con el requisito previsto en el referido inciso, pues la autoridad demandada reconoció que éste se desempeñó "como soldado voluntario a partir de 1 de enero de 1998 hasta el 31 de octubre de 2003", sin embargo, el análisis del asunto no estuvo enfocado en dilucidar el cumplimiento de esa condición, ya que el Tribunal se limitó a expresar que lo pretendido por el accionante era beneficiarse de los mejores aspectos de dos regímenes, esto es, de la Ley 131 de 1995 y del Decreto 1794 de 2000, en consecuencia, concluyó que solo le era aplicable la última disposición citada, y a pesar de ello, no efectuó un estudio de lo dispuesto en el referido artículo.

Así las cosas, es necesario precisar, que el contenido del inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, claramente establece, que los Soldados que prestaban sus servicios como voluntarios con anterioridad al año 2000, devengarían un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), y en el parágrafo del artículo 2° ibídem, se indicó que quienes expresen su intención de incorporarse como Soldados Profesionales y sean aprobados, se les deberá aplicar íntegramente lo dispuesto en dicho decreto; por tanto, la interpretación de la autoridad demandada a todas luces resulta inaceptable, toda vez que en el asunto no era necesario acudir a los mandatos de la Ley 131 de 1995, ya que de manera diáfana, el citado decreto establece que los Soldados que previamente prestaron sus servicios como voluntarios, podrían acceder a una asignación superior a la establecida para el personal que se vinculó con posterioridad a la expedición de esa norma, pues su propósito, fue premiar la antigüedad de quienes con anterioridad habían servido a la Institución.

En ese sentido, era innecesario acudir a disposiciones distintas al Decreto 1794 de 2000, pues como ya se dijo, en el proceso no se cuestionó que el demandante careciera de los requisitos para ser beneficiario del mandato previsto en el inciso 2° del artículo 1° ibídem.

Por lo anterior, evidencia la Sala, que el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la Sentencia de 25 de febrero de 2014, incurrió en un defecto sustantivo, pues inaplicó el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, a pesar de que reconoció que lo previsto en dicha norma regía en su integridad la situación jurídica del tutelante.¹⁷

16 Consejo de Estado, Sección Primera, 16 de octubre de 2014, Consejera Ponente: doctora María Elizabeth García González, expediente núm. 2014-02293-00, acción de tutela, actor: Raúl Casas Ovalle, accionado Tribunal Administrativo del Casanare.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M. P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), Rad. N° 11001-03-15-000-2014-02296-00.

La Sala reitera que efectivamente el Tribunal inaplicó de manera indebida el artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 ya que consideró, equivocadamente, que a los soldados que fueron voluntarios con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, y que pasaban a ser soldados profesionales, les correspondía una asignación del salario mínimo legal más una compensación del 40%, desestimando que el Decreto en comento dispuso una compensación del 60% para quienes habían sido soldados voluntarios y habían pasado a ser parte del régimen de los soldados profesionales.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, el Tribunal Administrativo de Casanare no solo interpretó erróneamente la norma en comento, sino que omitió lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 1° de la citada norma que dispuso que, *"Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)"*, incurriendo así en defecto sustantivo que vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor.

B. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "B" CONSEJERO PONENTE: DR. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN en providencia del veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-15-000-2015-00801-01 Actor: JOSE EDGAR MONCADA RANGEL Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ACCIÓN DE TUTELA – Fallo Primera Instancia.

4.2 Defecto sustantivo en cuanto al reajuste de la asignación mensual.

Dice el accionante que el tribunal omitió, y desconoció aplicar al caso, lo consagrado en el inciso 2° del artículo 1° del decreto 1794 de 2000...21... lo que condujo a adoptar una decisión equivocada y contraria a derecho, pues, en su caso se debe tener en cuenta para liquidar la asignación de retiro, el SMLMV a derecho, pues, en su caso se debe tener en cuenta para liquidar la asignación de retiro, el SMLMV incrementando en un 60% y no en un 40%, como lo hizo la caja y avaló el despacho judicial accionado.

Dice el artículo 1° de este decreto

"ARTICULO 1. ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL. Los soldados profesionales que se vinculen a las fuerzas militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementando en un sesenta por ciento (60%)". 22

Dijo el Tribunal:

"conforme lo expuesto se advierte que si bien el inciso segundo del artículo 1° del decreto 1794 de 2000 consagra como remuneración mensual para los soldados vinculados en vigencia de la ley 131 de 1985 y que pasaron de ostentar la categoría de soldados profesionales, un salario incrementado en el 60%; tal disposición deja de ser aplicable al momento en que se adquiere el derecho a la asignación de retiro en razón a que el número 13.2.1 del artículo 13 del decreto 4433 de 2004 dispuso de forma expresa que el salario mensual computable dentro de la asignación de retiro de los soldados profesionales, sin distinción alguna, es el establecido en el inciso 1° del decreto 1794 de 2000, precepto que efectivamente que tenido en cuenta por la entidad demandada para liquidar la pensión del accionante, tal como se señala en la resolución de reconocimiento pensional, en los actos causados..." (Fol.18 anexo de pruebas).

Está probado, y ello no tiene discusión, que: i) el actor se desempeñó como soldado voluntario desde el 1° de octubre de 1992 hasta el 31 de octubre de 2003 (cobijado por el régimen establecido en la ley 135 de 1985); ii) ostentó la condición del soldado voluntario a 31 de diciembre de 2003; iii) a partir del 1° de noviembre de 2003 fue considerado soldado profesional, quedando cobijado por

los decretos 1793 y 1794 de 2000, y posteriormente por el 4433 de 2004; iv) le fue reconocida asignación de retiro mediante la resolución No 3691 del 1° de agosto de 2011.

Para esta sala resulta claro que la interpretación que hace el tribunal no es razonable, conlleva la incorrecta aplicación del inciso 2° del artículo 1° del decreto 1794 de 2000, y se halla en contravía de lo consagrado en el artículo 53 de la constitución política, pues, en la aplicación e interpretación de la norma acoge la situación menos favorable, desconociendo que lo dispuesto en dicho inciso, para quienes ya venían vinculados como soldados profesionales, se les debe respetar el incremento del 60%, incluyendo para el reconocimiento de la asignación de retiro. Desconoce, de paso, precedentes horizontales y verticales, en tanto que otras Subsecciones de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en decisiones del consejo de Estado, se ha respetado el sano entendimiento de lo dispuesto en dicha norma (ver sentencias relacionadas pie de página No 4), con lo cual pone en condición de desigualdad al actor, en tanto que otros en igual situación que la suya, dicho derecho se les ha respetado.

La aplicación e interpretación que se hace de la normal no resulta razonable ni proporcionada.

C. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: **LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ**, en sentencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación No. 11001-03-15-000-2012-01189-01 Tutelante: Cecilio Cabezas Quiñones Tutelados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", Tutela – Fallo de segunda instancia

"Procede la Sala a resolver la impugnación presentada el señor Cecilio Cabezas Quiñones contra la sentencia de 13 de septiembre de 2012, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

Como ya advirtió la Sala, una vez el Tribunal transcribió las anteriores normas, construyó una argumentación tendiente a concluir que el actor estaba cobijado por el régimen de los soldados profesionales (Decretos 1793 y 1794 de 2000) y que en esas condiciones contaba con beneficios que no tuvo como soldado voluntario, y que solo bajo la Ley 131 de 1985 podía devengar un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), cuando lo cierto es que el Legislador extraordinario, en la norma inaplicada, estableció el régimen de transición para aquellos soldados que habían sido voluntarios y que posteriormente se incorporaran como profesionales, y por ello previó que solo en ese evento, el salario que los últimos recibirían sería el de un salario mínimo mensual incrementado en un 60%, a diferencia de aquellos soldados que ingresaron a la institución sin que previamente hubiesen prestados sus servicios como voluntarios, pues para ellos el pago sería de *"un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario"*.

Entonces, a diferencia de cómo lo consideró el Tribunal tutelado, el actor no estaba solicitando la aplicación de dos regímenes buscando beneficiarse con las mejores condiciones de cada uno de ellos, sino la observancia del régimen de transición previsto en la norma que le era aplicable, esto es, el Decreto 1794 de 2000.

Así las cosas, evidente para la Sala es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", al proferir la sentencia de 24 de mayo de 2012, incurrió en la irregularidad de naturaleza sustantiva alegada por el tutelante, pues inaplicó, sin razón alguna, el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 en abierta contradicción con su propia argumentación según la cual dicha normativa regía por completo la situación del señor Cabezas Quiñones.(negrilla y subrayado es nuestro)

En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del tutelante, dejará sin efectos la sentencia censurada y le ordenará a la autoridad tutelada que profiera una nueva donde se tengan en cuenta los lineamientos de esta providencia, y analice si en efecto el tutelante cumple con los requisitos que establece la normativa aplicable al caso, para haber sido beneficiario, mientras fue soldado profesional, de un salario equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), como lo establece el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000.

D. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: **SUSANA BUITRAGO VALENCIA** en providencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) Tutela contra providencia judicial - fallo de segunda instancia Radicación No. 11001-03-15-000-2014-02294-01 Tutelante: Gerardo Chacón Tutelados: Tribunal Administrativo de Casanare.

Procede la Sala a resolver la impugnación propuesta por la apoderada judicial del señor Gerardo Chacón contra la sentencia del 4 de diciembre de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que denegó la solicitud de tutela.

La Sala encuentra que le asiste razón al accionante, pues en efecto el Tribunal, bajo el título de *"los hechos demostrados en el caso concreto"*, relacionó los grados y tiempos en los cuales sirvió el actor en las Fuerzas Armadas, y frente a esto concluyó que *"...a partir del 1° de noviembre de 2003, el actor fue incorporado como profesional, y por lo tanto no mantuvo la condición de soldado voluntario..."*. Sin embargo, en el capítulo de *"fundamentos de la decisión"*, sin explicación alguna, la autoridad judicial tutelada indicó que no se allegaron al expediente *"...los documentos que demuestren la incorporación del actor a esta categoría..."*, refiriéndose a la de soldado profesional, cuando ya previamente lo había aceptado como un hecho demostrado.

No obstante lo anterior, la irregularidad del Tribunal es superada por esa misma autoridad, cuando a renglón seguido de su afirmación según la cual no se probó la condición del soldado profesional, adujo que esa

situación no fue objeto de discusión en el proceso y que por el contrario es admitido por la parte demandada como cierto.

Implica lo dicho que el argumento del tutelante en este sentido no tiene la entidad suficiente para incidir directamente en el sentido de la sentencia, en especial porque ese no fue el fundamento de la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo de Casanare, ya que el apoyo para el efecto, lo encontró en el supuesto interés del actor en que se le aplicaran simultáneamente los beneficios de los regímenes de los soldados voluntarios (Ley 131 de 1985) y de los soldados profesionales (Decretos 1793 y 1794 de 2000).

Ahora, si bien la primera de las irregularidades alegada por el tutelante no prosperó, no ocurre lo mismo con la segunda de ellas, como se verá a continuación.

El accionante alegó que el Tribunal en la providencia censurada afirmó que a él le aplicaba íntegramente el Decreto 1794 de 2000, que establece el régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales del Ejército Nacional, pero que, en síntesis, inaplicó el inciso 2º del artículo 1º de esa norma.

En este punto, le basta a la Sala con verificar el contenido de la norma que se alega inaplicada y los fundamentos de la providencia censurada ya analizados, para concluir que, en efecto, el Tribunal Administrativo de Casanare, con sentencia de 10 de julio de 2014, si bien transcribió la norma a folios 5 y 6 del fallo, no tuvo en cuenta su contenido, y además, inexplicablemente concluyó que el interés del actor era el de obtener la aplicación simultánea de dos regímenes.

El contenido del artículo del Decreto 1794 de 2000 que alega inaplicado el tutelante es el que la Sala resalta a continuación:

"ARTÍCULO 1. ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)."

Y el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1794 de 2000 dice:

"ARTÍCULO 2. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%).

PARÁGRAFO. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen."

Como ya advirtió la Sala, una vez el Tribunal transcribió las anteriores normas, construyó una argumentación tendiente a concluir que el actor estaba cobijado por el régimen de los soldados profesionales (Decretos 1793 y 1794 de 2000) y que en esas condiciones contaba con beneficios que no tuvo como soldado voluntario, y que solo bajo la Ley 131 de 1985 podía devengar un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), cuando lo cierto es que el Legislador extraordinario, en la norma inaplicada, estableció el régimen de transición para aquellos soldados que habían sido voluntarios y que posteriormente se incorporaran como profesionales, y por ello previó que solo en ese evento, el salario que los últimos recibirían sería el de un salario mínimo mensual incrementado en un 60%, a diferencia de aquellos soldados que ingresaron a la institución sin que previamente hubiesen prestados sus servicios como voluntarios, pues para ellos el pago sería de "un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario".

Entonces, a diferencia de cómo lo consideró el Tribunal tutelado, el actor no estaba solicitando la aplicación de dos regímenes buscando beneficiarse con las mejores condiciones de cada uno de ellos, sino la observancia del régimen de transición previsto en la norma que le era aplicable, esto es, el Decreto 1794 de 2000.

Así las cosas, evidente para la Sala es que el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia de 10 de julio de 2014, incurrió en la irregularidad de naturaleza sustantiva alegada, pues inaplicó sin razón alguna el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 en abierta contradicción

con su propia argumentación según la cual dicha normativa regia por completo la situación del señor Gerardo Chacón. (Negrilla y subrayado es nuestro)

En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, "*prevalencia del derecho sustancial*" y "*respeto a los derechos adquiridos*" del tutelante, y en consecuencia, dejará sin efectos la sentencia censurada y le ordenará a la autoridad tutelada que profiera una nueva donde tenga en cuenta los lineamientos de esta providencia y analice si el tutelante cumple con los requisitos que establece la normativa aplicable al caso para ser beneficiario de un salario equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), como lo establece el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000.

VI. FALSA MOTIVACIÓN.

EL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL, en la motivación del acto administrativo que se demanda, incurrió en causal de **FALSA MOTIVACIÓN**, al no existir correspondencia entre la decisión adoptada y los motivos de hecho y de derecho que se aducen para negar a mi poderdante las peticiones solicitadas, lo que es motivo de nulidad (Art. 138 CPACA.); además quebrantó las disposiciones de jerarquía superior normativa.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han entendido que existe la ilegalidad denominada **FALSA MOTIVACIÓN**, cuando los fundamentos alegados por el funcionario que expidió el acto administrativo, en realidad no hayan existido, o no tengan el carácter jurídico que el legislador les ha dado, es decir que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos de una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la medida tomada.

Se denominan **motivos**, según la doctrina francesa, las circunstancias de hecho que proceden o provocan toda decisión administrativa; la sucesión de acontecimientos que impulsan al administrador público a obrar; la decisión en tales circunstancias será ilegal, si no se justifican las razones que la provocaron; obviamente la causal de la falsa motivación encuadra dentro de la violación de la ley general.

Con base en lo anterior, me permito proceder a explicar los motivos por los cuales **EL COMANDO DEL EJERCITO NACIONAL** incurrió en el vicio de la FALSA MOTIVACION, cuando negó los derechos reclamados, sin tener un fundamento jurídico que legitime las decisiones tomadas por parte de la administración pública.

Incurrir en FALSA MOTIVACIÓN, como ocurrió en el caso *sub examine*, normalmente se presenta por la aplicación incorrecta de los métodos de interpretación normativa o por la falta de conexidad entre los argumentos esbozados en el acto administrativo y la solicitud presentada a la administración; en esta demanda se ha podido dejar muy claro, los postulados normativos y de interpretación jurisprudencial y doctrinarios respecto del porcentaje en que debe incrementarse la asignación básica de mi poderdante, erróneamente interpretado por la parte demandada.

Con lo anterior, queda claro que la Entidad demandada, para negar las pretensiones de mi poderdante, ha hecho una incorrecta aplicación del decreto del decreto 1794 de 2000, al modificar la base de liquidación del sueldo básico a partir del mes de noviembre de 2003, donde se desmejoro en un 20% su asignación básica; provocando la existencia de la nulidad del acto demandado por falsa motivación, por mutación de la verdad e incorrecta interpretación normativa.

Señor juez, del estudio de los argumentos invocados en la presente demanda, no se entiende, porqué la Entidad demandada no ha dado estricto cumplimiento a la obligación consagrada en los decretos y leyes expuestos, encontrándose en abierta contradicción con la constitución de 1991, toda vez que la inobservancia por parte de un funcionario público de las obligaciones constitucionales y legales que le corresponden al Estado, está poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho pilar de la actual normatividad.

VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

De conformidad con el artículo **157** del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo la cuantía de la demanda por valor de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$17.653.417) M/CTE (sin indexación)** esta cuantía resulta del análisis comparativo del salario mensual recibido en cada uno de los años por mi poderdante, en comparación con la que debió recibir, si la asignación básica de los **últimos tres años**, se hubiese liquidado sobre la base de un salario mínimo más un sesenta por ciento (60%) tal como se explicó en el transcurso de la demanda.

La diferencia existente entre el salario pagado y el salario que se ha debido pagar, se multiplica por catorce (14), que es el número de salarios anuales a que tiene derecho mi poderdante, resultado que arroja el monto anual dejado de pagar y la sumatoria de año por año, nos da la cuantía materia de esta demanda.

Con el fin de ilustrar en mejor forma al Señor juez, a continuación se presenta el cuadro demostrativo de este análisis:

AÑOS	SMLV + 40%	SLMILV + 60%	DIFERENCIA MENSUAL	SALARIOS ANUALES	ACUMULADO ANUAL	SALARIOS PARA CALCULAR LA CUANTIA	ESTIMACION DE LA CUANTIA
2011	1.854.722	2.225.666	370.944	14	5.193.222		0
2012	1.961.830	2.354.196	392.366	14	5.493.124		0
2013	2.040.303	2.448.364	408.061	14	5.712.848	10	4.080.606
2014	2.050.112	2.460.135	410.022	14	5.740.315	14	5.740.315
2015	2.142.367	2.570.841	428.473	14	5.998.629	14	5.998.629
2016	2.292.332	2.750.799	458.467	4	1.833.868	4	1.833.868
TOTAL ACUMULADO					29.972.005		17.653.417

EXPLICACIÓN DEL CUADRO

En la primera columna: Relación de los años en reclamación.

Segunda Columna: Corresponde a la asignación de retiro que le fue cancelada a mi poderdante en el respectivo año, tomando como asignación básica para la liquidación el salario mínimo más un 40% de dicho salario.

Tercera Columna: Corresponde a la asignación de retiro que debió ser cancelada a mi poderdante en el respectivo año tomando como asignación básica para la liquidación el salario mínimo más un 60% de dicho salario.

Cuarta Columna: Diferencia mensual entre la asignación de retiro liquidada tomando como base el salario mínimo más el 60% y el efectivamente cancelado que toma como base el salario mínimo incrementado en un 40%.

Quinta Columna: Número de mesadas recibidas en el respectivo año.

Sexta Columna: Diferencia anual entre la asignación de retiro liquidada, tomando como base el salario mínimo más el 60% y el cancelado tomando como base el salario mínimo más el 40%.

Séptima Columna: Número de mesadas tenidas en cuenta para hacer la estimación razonada de la cuantía de conformidad al artículo 157 del CPACA.

Novena Columna: Estimación razonada de la cuantía para los efectos del artículo 157 del CPACA.

VIII. COMPETENCIA

El Distrito Judicial Administrativo **DEL VALLE DEL CAUCA**, es competente para conocer de este asunto en primera instancia por la cuantía y naturaleza del asunto y por factor territorial por cuanto el señor **EDINSON GARCES RAMIREZ**, tiene como unidad el **BATALLON DE ARTILLERIA N° 3 BATALLA DE PALACE EN BUGA** , lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del C.P.A.C.A, y el artículo 20 C.P.C.

IX. PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito que se tengan como pruebas, la documentación aportada con la demanda, así:

1. Poder legalmente conferido para actuar en vía contenciosa.
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor **EDINSON GARCES RAMIREZ**.
3. Memorial contenido del derecho de petición elevado ante la entidad demandada radicado DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015.
4. Oficio No. 20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015 expedido por LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL-SECCION NOMINA en respuesta del Derecho de Petición motivo de esta Litis, con el cual se agotó la vía gubernativa.
5. Constancia de notificación del acto administrativo No.20155660969011 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015, de fecha entregado por la empresa de servicios postales nacionales 472 el día 15 DE octubre de 2015.
6. Certificación expedida por el comando ejército nacional, Donde certifica el lugar geográfico donde presta servicios el señor **SLP EDINSON GARCES RAMIREZ**.
7. Acta de conciliación N° 460499, mediante la cual se da cumplimiento al requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 ley 1437 de enero 18 de 2011.
8. Solicito respetuosamente a ese despacho que en el evento de faltar alguna **constancia, certificación o notificación** que se considere necesaria para el estudio de la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el CPACA se ordene a la demandada allegarlos en su oportunidad.
9. Copias de la demanda con sus respectivos anexos para: Archivo, Agencia nacional de defensa jurídica del estado, Traslado a la entidad demandada y una para el Ministerio Público.

20% SALARIO

X. NOTIFICACIONES

DEMANDADA: Al señor Ministro de Defensa **LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL**, NIT: 800.130.635-4, en la Avenida Calle 26 N° 52 - 00. Edificio Comando Ejército de la ciudad de Bogotá DC, correo electrónico para notificaciones ceayp@ejercito.com.co

DEMANDANTE: Mi poderdante **EDINSON GARCES RAMIREZ** las recibirá en la CALLE 23 REUBICACION LA ISLA de la Ciudad de ANDALUCIA -VALLE.

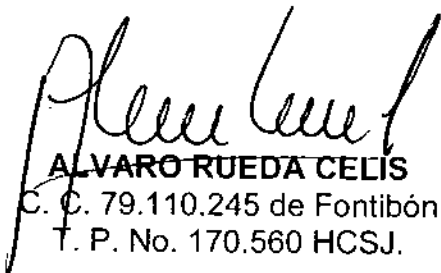
MINISTERIO PÚBLICO: El señor Procurador delegado ante ese Honorable despacho, puede ser notificado en la secretaría de esa Corporación o en sus oficinas situadas en el mismo edificio en que funciona la Procuraduría General de la Nación ubicado en la Carrera 5 N° 15 – 60, de la ciudad de Bogotá, email; procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, las recibirá en la carrera 7 No 75 – 66 pisos 2 y 3, teléfono 2558957 ext. 303, 305 de la ciudad de Bogotá, email: procesos@defensajuridica.gov.co

EL SUSCRITO APODERADO: Las recibiré en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la calle 73 bis N° 26-28 B/ los alcázares, en la ciudad de Bogotá, teléfono 7420825.

De conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, acepto que las notificaciones del presente proceso se hagan as través del siguiente correo electrónico email: alvarorueta@arcabogados.com.co

Del Señor Juez,


ALVARO RUEDA CELIS
 C. C. 79.110.245 de Fontibón
 T. P. No. 170.560 HCSJ.